

Informe 17-2016

Observatorio Defensa

Semana del 11 al 17 de julio de 2016

- 1.- El gobierno involucrará a las Armada en la lucha contra la piratería**
- 2.- El gobierno pagará juicios de empresas alemanas en el CIADI que incluyen la construcción de submarinos en la década de 1980**
- 3.- Editorial del diario La Nación sobre la situación del sector Defensa**
- 4.- El Ministro de Defensa se mostró interesado en intercambiar experiencias en lucha contra el terrorismo con el jefe del Ejército ruso.**
- 5.- Avanza plan oficial para que las Fuerzas Armadas realicen seguridad interior**

11 de julio (La Nación)

1.- El Gobierno luchará contra los piratas en Asia y África

El Gobierno decidió dar una pelea frontal contra la piratería de alta mar. No se trata de una película de aventuras de Hollywood. El ataque de barcos piratas en los mares de China a buques que transportan productos agrícolas argentinos y los potenciales negocios del país que se verán afectados en las costas de África por la piratería despertaron una alerta en la Cancillería y en el Ministerio de Defensa, que ya se pusieron a trabajar en un plan de contingencia concreto. Desde hace unos meses, en el ministerio que conduce Julio Martínez observan con preocupación que los empresarios que exportan soja y otros productos a Asia ven afectados sus envíos por el ataque de barcos piratas en el mar meridional de China. Algo similar ocurre en las costas de Nigeria, donde un grupo de piratas conocido como Vengadores tiene aterrorizada una zona desde donde la Argentina prevé importar en el futuro inmediato gas licuado. El tema también fue comentado en los mensajes cifrados que recibe la Cancillería de sus embajadas en esas zonas. "Los intereses argentinos involucrados son los de nuestra exportación agropecuaria a China. Los costos de seguros y fletes que nuestros productores deben pagar en esa región a las empresas navieras dependen de las condiciones de navegabilidad de esas rutas. Cuanta mayor libertad y más

seguridad de la navegación por las tensiones geopolíticas interestatales en la región y la actividad de la piratería haya, más baratos serán los costos", expresó a LA NACION José Luis Vila, subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa. Ante esta situación de riesgo que afecta a la economía argentina, el Gobierno empezó a evaluar algunas ideas: por ejemplo, se abrirán nuevas agregadurías militares en las embajadas de países situados en el mar de China. Ya hay un acuerdo de trasladar también unidades de inteligencia estratégica del Caribe a la zona en rojo de Asia. Por lo pronto, se prevé abrir en lo inmediato una agregaduría militar en Filipinas que trabaje en forma coordinada con las mismas oficinas argentinas situadas en China, la India y Australia. En esas embajadas también se dispondrá de más delegados militares de apoyo para producir informes de inteligencia y detectar a tiempo zonas de riesgo de piratas. No son las únicas medidas que el ministro Martínez y la canciller Susana Malcorra están pensando para hacer frente a este flagelo de larga historia mundial. También se evalúa coordinar tareas de inteligencia con otros países que trabajan en la lucha contra los piratas. Las fuerzas armadas de China, Tailandia, Filipinas e Indonesia mantienen una unidad de operación común contra la piratería. Estados Unidos y varios países de la Unión Europea hacen tareas de persuasión similares, más allá de las tareas de patrullaje de la OTAN. A la vez, el Ministerio de Defensa enviará buques de apoyo para embarcaciones que transporten a Asia productos argentinos. Según pudo saber LA NACION, todas estas tareas se están coordinando bajo la órbita del subjefe del Ejército, general de brigada Santiago Ferreyra; el subjefe de la Armada, vicealmirante Horacio Nadale; el subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Fernando Nieto, y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Miguel Máscolo.

Fuente: <http://www.lanacion.com.ar/1917279-el-gobierno-luchara-contra-los-piratas-en-asia-y-africa>

11 de julio (La Nación)

2.- El gobierno pagará juicios de empresas alemanas en el CIADI que incluyen la construcción de submarinos en la década de 1980

El Gobierno buscará solucionar en las próximas semanas tres casos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para recuperar el crédito de Alemania, con la intención de financiar exportaciones e inversiones de mediano plazo. Calificadas fuentes de la Casa de Gobierno informaron a LA NACION que "con el pago de estos casos se logrará reabrir el crédito de la agencia Hermes", que le permite a las empresas alemanas tener un seguro para sus exportaciones y sus inversiones en el exterior. Uno de los casos es el de la obra "Puente del Litoral", con la empresa Hochtief. El reclamo ante el Ciadi surgió por una diferencia referente a una concesión por 25 años, adjudicada en 1997 a Hochtief y a un consorcio de compañías constructoras, para la construcción, el mantenimiento y la operación de una autopista con peaje y de varios puentes en Argentina, entre las ciudades de Rosario y Victoria. Hochtief y otros miembros del consorcio constituyeron en Argentina una compañía, Puentes del Litoral SA ('PdL'), para llevar adelante la concesión. Hochtief es la propietaria del 26% de las acciones de PdL. Hochtief alegó perjuicios que atribuye a medidas adoptadas por Argentina "en violación de las obligaciones que le imponían el tratado bilateral de inversiones y el derecho internacional

consuetudinario", según la página del Ciadi. El segundo es por un contrato de construcción de submarinos en la década del 80 con la firma Thyssen. El tercer caso es de la empresa Fresenius, dedicada a la importación y distribución de productos y equipos desde Alemania en el área de salud. Se inició en 2015 por falta de pagos por parte del PAMI, el Ministerio de Salud y las provincias. Fuentes diplomáticas confirmaron que se trabaja para resolver estos tres casos y detallaron que la cuestión se trató en la visita del presidente Mauricio Macri la semana pasada a Alemania, en la que se reunió con la canciller Angela Merkel y con empresarios de ese país. La fuente alemana afirmó a LA NACION que "la resolución de estos casos serviría para reabrir el crédito de Hermes". Además, aseguró que "hay una energía positiva, porque la química entre Merkel y Macri fue excelente; y lo mismo ocurrió con los empresarios; fue una gira muy positiva". En mayo, el Gobierno llegó a un acuerdo por US\$ 217 millones en bonos con las empresas BG Group PLC y El Paso Energy International Company, que tenían juicios contra la Argentina en el CIADI. El Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que los acuerdos contemplaron saldar los montos acordados a través de la entrega de US\$ 217 millones de Bonos de la Nación Argentina (BONAD 2024) en dólares, resultando en una quita nominal promedio de aproximadamente 31 por ciento. Previamente, en 2013, el kirchnerismo había decidido pagar en los casos de Blue Ridge Investments (por el juicio de CMS), CC-WB Holdings (por juicio de Continental Casualty Company), Vivendi con Aguas del Aconquija y Azurix. Los casos de la Argentina pendientes en el Ciadi son los de Abertis, Salini Impregilo, Casinos Austria, Teiver, Urbaser, Abaclat, Mobil Exploration, SAUR, Unisys, Electricidad Argentina, Enersis, Suez, Gas Natural, Camuzzi Internacional, AES, Enron y los tres de Alemania antes mencionados, según la página web de este tribunal del Banco Mundial.

Fuente: <http://www.lanacion.com.ar/1917391-pagaran-casos-del-ciadi-para-que-alemania-reabra-el-credito-para-invertir-en-la-argentina>

14 de julio (La Nación)

3.- Defensa: por ahora sólo desfiles

La realización de desfiles en conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia fue un indicio de la reubicación de las Fuerzas Armadas en la consideración oficial y probablemente también social. En palabras del ministro de Defensa, Julio Martínez, al anunciar el evento: "En el gobierno anterior hubo maltrato, persecución y falta de respeto a nuestras Fuerzas Armadas, a las que tenían escondidas" y agregó: "No es para mostrar poder, que tampoco tenemos porque hemos recibido las Fuerzas Armadas con falta de capacidades y presupuesto". Es todavía prematuro asumir que la realización de los importantes desfiles realizados el fin de semana último y esas palabras del ministro sean el comienzo de un proceso de recuperación del sistema de defensa. Las severas limitaciones presupuestarias que debe enfrentar el gobierno de Mauricio Macri se contraponen con la necesidad de inversiones en un aparato militar desmantelado. Desde 1983, en el marco de un ambiente político adverso a las Fuerzas Armadas, se practicó un desarme, sin declararlo formalmente. La Argentina fue así un caso atípico de un país que procede de esa manera sin precaverse mediante un acuerdo de defensa o de desarme regional, o mediante un convenio de protección por otra potencia militar. En 33 años de gobiernos constitucionales el Congreso nunca desarrolló una discusión seria sobre las implicancias de quitar gradualmente a las Fuerzas Armadas

su capacidad defensiva. Pero esto sucedió. Cualquier voz señalando esa falencia sería mal considerada políticamente y sospechada de defender "represores" o de alimentar intenciones golpistas. Si el propósito sigue siendo mantener desarmadas las fuerzas para asegurar que no haya golpes militares, ello significaría después de 33 años otro grave problema de madurez institucional. El acatamiento militar a las autoridades de la Constitución debe entenderse como un hecho ya consolidado. No tiene sentido continuar afrontando un importante gasto en defensa para destinarlo en cerca de un 90 por ciento a pagar salarios y gastos corrientes sin ningún impacto defensivo. El presupuesto de Defensa para 2016 continúa con esa misma característica y no expone un mejoramiento en aquellos objetivos que están sujetos a alguna cuantificación. Por ejemplo, la cantidad de días de operaciones, horas de vuelo de entrenamiento o tiempos de navegación. Aun siendo estas metas muy poco ambiciosas, a menudo no se cumplen por la escasa disponibilidad de equipamiento o munición. La Fuerza Aérea carece de aviones de combate operativos para poder cumplir con las horas de vuelo requeridas en la formación de pilotos. En la aviación naval la situación es aún más crítica. Dentro de estas extremas escaseces, el presupuesto de defensa expone en sus limitadas inversiones la prioridad por impulsar la industria militar local. Este objetivo puede estar en contradicción, y de hecho lo está, con el logro de la mayor eficacia militar basada en armamento de última generación. Por ejemplo, se propone modernizar el Polo Químico de la Fábrica Militar de Río Tercero. También se han programado una línea de armado de vagones y una planta de fabricación de pistolas en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán. Ninguna de estas inversiones aportará capacidad militar significativa. La pregunta, entonces, es por qué el presupuesto de defensa pone al Estado a armar vagones de uso civil. La Fuerza Aérea prevé la producción de un avión de entrenamiento IA-100 en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (Fadega). En el mismo establecimiento se contratarán el mejoramiento del IA-58 Pucará y la fabricación de aviones Pampa II. Como un programa plurianual el Ejército invertirá en la transformación de helicópteros UH-1 y en la modernización del Tanque Argentino Mediano. La Armada continuará la renovación de equipamientos en los destructores Meko 360. Puede observarse en este programa que será priorizado el uso de la industria militar local en la fabricación y que además se apunta a equipamientos para entrenamiento más que para operaciones. Por lo tanto, no se modificará el curso de las tendencias observadas en los últimos años. Se impone una completa revisión de la política de defensa que debería sustentarse en una discusión que se inicie con la decisión de contar con fuerzas armadas. Salvado esto, el marco de un programa consensuado debe incluir la reconciliación y la superación de los sentimientos antimilitares que han motivado no sólo el deterioro defensivo que exponemos en este editorial, sino también un tratamiento judicial asimétrico y claramente violatorio de los principios de la justicia en el tratamiento de los hechos de la guerra antisubversiva que nuestro país vivió en los años setenta.

Fuente: <http://www.lanacion.com.ar/1918164-defensa-por-ahora-solo-desfiles>

7 de julio (Prensa MINDEF)

4.- El Ministro de Defensa se mostró interesado en intercambiar experiencias en lucha contra el terrorismo con el jefe del Ejército ruso.

El ministro de Defensa, Julio Martínez, recibió esta mañana al comandante en jefe de la Fuerza Terrestre de la Federación de Rusia, coronel general Oleg Salyukov, con quien dialogó sobre la necesidad de incorporar nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas e intercambiar conocimientos en temas relacionados con la lucha contra el terrorismo y la ciberdefensa. Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Belgrano del Edificio Libertador, Martínez expresó su intención de "profundizar el vínculo entre Argentina y Rusia" y "continuar y respetar los acuerdos que ya fueron entablados en gestiones anteriores". Al respecto, el titular de la cartera de Defensa recordó la adquisición de helicópteros y embarcaciones en Rusia y manifestó la necesidad de que "los equipos de trabajo de ambos estados mantengan las negociaciones para incorporar nuevos equipamientos destinados a las Fuerzas Armadas argentinas", en el marco de un proceso que incluya etapas de financiamiento y de servicio post venta. En la reunión, Martínez solicitó además a la delegación rusa intercambiar conocimientos sobre temas relacionados con la lucha contra el terrorismo y ciberdefensa. También, el funcionario argentino hizo hincapié en poder efectuar maniobras conjuntas y compartir información sobre misiones para el mantenimiento de la paz, bajo mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por su parte, el jefe del Ejército, Salyukov, coincidió en la importancia de profundizar el contacto con la Argentina en materia técnico militar y aseguró que su país "está abierto a la cooperación en cualquier esfera". El militar ruso planteó compartir experiencias en temas relacionados con la salud y la medicina militar, principalmente ante catástrofes. Además, invitó a los efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas a compartir ejercitaciones en su país, al tiempo que consideró la posibilidad de enviar especialistas rusos para brindar capacitaciones en distintas áreas. Acompañaron durante la reunión el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Ángel Tello, junto a los titulares del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, general de división VGM, Bari del Valle Sosa; del Ejército, general de división Diego Suñer, y de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur.

Fuente: <http://www.mindef.gov.ar/plantillaNoticia.php?notId=222>

16 de julio (Tiempo Argentino)

5.- Avanza plan oficial para que las Fuerzas Armadas realicen seguridad interior

En política nadie cree en casualidades. Por eso, cuando el ministro de Defensa Julio Martínez reconoció al carapintada Aldo Rico vestido de fajina y montado sobre un jeep de combate desfilando durante los festejos del 9 de Julio murmuró un categórico "Vienen por mí". Es probable que no se refiriera a su cargo –con atribuciones tan recortadas que lo vuelven casi decorativo–, sino a su lapicera: el ministro –más temprano que tarde– tendrá a la firma un proyecto de ley que le permitirá a las Fuerzas Armadas operar en seguridad interior, una tarea que los uniformados tienen vedada desde el retorno de la democracia. El borrador del proyecto de ley está a cargo del ex carapintada Gómez Centurión, referente del PRO en Defensa. El radical Martínez, al menos en público, no puso reparos a la idea, pero los soldados del PRO aun así le desconfían. Al fin y al cabo, la restricción para que las Fuerzas Armadas operen en seguridad interna es un legadopreciado del gobierno de Raúl Alfonsín. Por sospecha o prejuicio, Martínez aún no tuvo contacto con el borrador del proyecto, que es manipulado en secreto por funcionarios de la cartera que responden

al mayor retirado del Ejército Juan José Gómez Centurión, referente del PRO en la materia, que opera como ministro de Defensa en las sombras. Gómez Centurión y Rico se conocen bien: el mayor macrista participó de los levantamientos militares de Semana Santa y Monte Caseros que jaquearon al gobierno de Alfonsín. A pesar de esos antecedentes, en 2012 el entonces alcalde Mauricio Macri lo puso al frente de la estratégica Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad, donde protagonizó polémicas y escándalos varios, como la acusación de haber pretendido evitar que se investigara el incendio trágico de Iron Mountain. En ese episodio fallecieron diez bomberos y se incineraron documentos de importantes empresas argentinas, entre ellas, varias del clan presidencial. En retribución a su lealtad, Macri quería que fuera Gómez Centurión quién ocupara el puesto que hoy tiene Martínez, pero el radicalismo puso el grito en el cielo por su pasado de betún y terminó como director general de Aduanas. Sin embargo, los cuadros que formó y condujo como director del área de Defensa de la Fundación Pensar –el think tank del PRO– ocuparon sillones clave del organigrama ministerial. Gómez Centurión colocó como subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar de la cartera al coronel (R) Hugo Patricio Pierri, su mano derecha en Pensar. Y por debajo de Pierri ubicó al también coronel (R) Jorge García Mantel, como director general. En las formas, ambos responden a Ángel Tello, un experto en defensa a quien los militares consideran progresista –quizá porque no hace exégesis abierta del genocidio–, pero que ve con buenos ojos la concreción de una reforma de la Ley de Defensa y la participación de los uniformados en seguridad interior. Afines en ideas y objetivos, Tello es el aliado ideal de Gómez Centurión y sus soldados, encargados de preparar y pulir el proyecto que pretende poner a los militares a combatir delitos. El borrador se manipula como un secreto de Estado. Sus autores temen que una eventual filtración irrite a los socios de la UCR y detone una crisis en Cambiemos antes de tiempo. “La idea es presentarla en el segundo semestre” explica un empleado del Ministerio que, por obvias razones de supervivencia laboral, pide reserva de su nombre. Y agrega: “Pero la presentación en sociedad dependerá de que se pueda instalar fuerte en la población y la política la necesidad de la ley. ¿Cómo ocurrirá eso? Simple: con una campaña de saturación de noticias sobre el narcotráfico y su efecto corruptor sobre la política y las fuerzas de seguridad”. Basta prender la tele o repasar los medios afines al gobierno para comprobar que esa campaña ya empezó. El miércoles pasado, de hecho, el diario La Nación tuvo un brote de celebración precoz. “La realización de desfiles en conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia fue un indicio de la reubicación de las Fuerzas Armadas en la consideración oficial y probablemente también social” prologó el artículo editorial, que incluyó un tácito aval al proyecto de ley en ciernes y una proclama reaccionaria a toda orquesta: “Se impone una completa revisión de la política de defensa que debería sustentarse en una discusión que se inicie con la decisión de contar con fuerzas armadas. Salvado esto, el marco de un programa consensuado debe incluir la reconciliación y la superación de los sentimientos antimilitares que han motivado no sólo el deterioro defensivo que exponemos en este editorial, sino también un tratamiento judicial asimétrico y claramente violatorio de los principios de la justicia en el tratamiento de los hechos de la guerra antisubversiva que nuestro país vivió en los años setenta”, publicó el periódico, memorando sus peores días negacionistas. Es de esperar que, como el diario de los Mitre, la familia militar considere que la ley reivindica el accionar castrense durante la dictadura, y es probable que utilicen el envión para fortalecer sus reclamos de impunidad. En el gobierno, sin embargo, lo ven con otros ojos: creen que abrirá más oportunidades de negocios. La incorporación de los militares a la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales es un viejo anhelo de los Estados Unidos, que lleva

años pregonando y pergeñando ese deseo a través de su Comando Sur. El proyecto que están elaborando los soldados de Gómez Centurión toma en cuenta las sugerencias de la Embajada como si fueran órdenes. Se sabe: los militares argentinos suelen padecer un extraño cuadro de nacionalismo colonial. Según lo que llegó a oídos del ministro Martínez, el borrador retoma –en concepto y contenido– un viejo proyecto de Gabriela Michetti que proponía la “creación del Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte”. No sería extraño: aquella propuesta de 2011 se elaboró en base a papers de la Fundación Pensar, confeccionados por las mismas manos que hoy trabajan sobre el nuevo borrador. Parte de ese proyecto ya se hizo realidad con el decreto 228/16, que declaró la Emergencia de Seguridad. La norma prevé el derribo de aeronaves no identificadas, previo trámite de dar una voz de alto. El decreto de Macri, sin embargo, no avanzó sobre un aspecto que la Embajada considera central: dotar a las Fuerzas Armadas de facultades para que puedan realizar tareas de inteligencia y seguridad doméstica. Aquel proyecto de Michetti ya lo reclamaba con todas las letras: “Nuestras fuerzas armadas están llevando a cabo servicios activos de índole policial en todas las misiones de paz o humanitarias en las que se encuentran involucradas. Resulta ridículo que puedan, por ejemplo, ejercer roles de seguridad interior en Haití actuando como una fuerza policial, pero que no puedan actuar en su propio territorio impidiendo el ingreso de aeronaves cargadas de droga”. En aquel proyecto, como en el que se presentará, la propuesta se justificaba por la presunta mutación de las amenazas que supuestamente acechan al país. “Hoy en día los enemigos de los estados son el terrorismo, la narcoguerrilla, los movimientos separatistas, la piratería, etc. (sic). Los nuevos enemigos, hasta hace poco más de una década, eran aquellos para los cuales se entrenaban los miembros de las fuerzas de seguridad, pero que rara vez fueron combatidos por las fuerzas armadas. Las amenazas que estos conflictos implican en la actualidad para las naciones, son de tal magnitud que deben ser consideradas materia propia de la defensa nacional”. En Colombia, México y Brasil, por citar países de la región que ejecutaron los deseos del Comando Sur, los resultados distan de ser los que pronosticó Michetti. La incorporación del personal militar al “combate” del delito doméstico incrementó el espiral de violencia y corrupción, creando incluso nuevas y sofisticadas bandas paramilitares más sanguinarias y salvajes que los delincuentes con los que debía “combatir”. En un país con la historia de la Argentina –maltratada por una larga sucesión de golpes cívico-militares–, el asunto provoca, además, otros temores. Si bien es cierto que se ejecutó una profunda depuración interna, y que las nuevas generaciones de uniformados se educaron en democracia, existen razones para sospechar que persisten sectores castrenses proclives a operar en política en función de intereses sectoriales. Con base en esos antecedentes, Elisa Carrió, fundadora de Cambiemos, cruzó duro a su socio carapintado Gómez Centurión. “Meter a los militares en seguridad interna es un disparate”, le reprochó en noviembre pasado, durante una jornada de debate en la Universidad de Belgrano. A Carrió, en rigor, no la perturba tanto que le saquen el bozal a los uniformados sino quién manejará las correas. El rechazo, en tal caso, es su manera de negociar que le permitan consentir o impugnar esa designación crucial. Hay varios anotados en esa pulseada. Los soldados del PRO, la UCR sensible, la pata mercantil de Cambiemos y la Embajada de EE UU pujan por controlar ese renovado aparato armado que –se presume– será dotado con recursos técnicos de última generación. Rápido para esos mandados, el que picó en punta fue el operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, quién ya colocó a un miembro de su nutrida escudería en la primera línea del ministerio: el flamante subsecretario de Asuntos Internacionales, José Luis Vila. Ex militar, camarada de liceo del polémico ex jefe del Ejército César Milani y con vasta experiencia en el

submundo del espionaje, Vila reporta al viceministro Tello, pero responde a Nosiglia, Gran Maestro de una red que combina negocios, política y poder. Carrió, su enemiga íntima desde hace décadas, ya advirtió que está dispuesta a darle batalla. Por la historia de los contendientes, es de esperar que llueva munición gruesa. La delegación de Bandera Vecinal, el sello político del neonazi Alejandro Biondini, se acomodó a la cabecera y dijo: “Proponemos que se restaure el Servicio Militar Obligatorio”. Fue durante la “Mesa de Juventudes Políticas Partidarias” convocada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo. Orgullosa de pertenecer, la organización difundió su visita a la Rosada y provocó una crisis de nervios en el anfitrión. “No fueron invitados, se presentaron como un partido vecinalista”, se excusó Robledo, sumando una confesión de incompetencia al bochorno. Una cosa a favor de Robledo: su derrape no fue original. Hace dos años, la intendencia de Mauricio Macri organizó unas “Jornadas sobre Malvinas” animadas por filonazis, ex combatientes acusados de torturar conscriptos, y carapintadas. Entre los animadores estuvo Juan José Gómez Centurión, actual titular de Aduana, referente del PRO en Defensa e impulsor de que las FF AA participen en Seguridad Interior. Total normalidad.

Fuente: <http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/57756/avanza-plan-oficial-para-que-las-fuerzas-armadas-realicen-seguridad-interior>

El Informe Semanal Argentina es un servicio de informaciones sobre asuntos de defensa y temas militares, que forma parte del Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas y es elaborado por Juan López Chorne para el Proyecto “El Desarrollo de la Política Comparada en América Latina” de la Universidad Nacional de Quilmes.